



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

| | |
|-------------------|---|
| DEMANDANTE | JEISON ARLEY ARANZAZU GIRALDO |
| DEMANDADOS | TALLERES AUTORIZADOS S.A. Y DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. |
| TIPO DE PROCESO | Ordinario |
| RADICADO NACIONAL | 05266310500120220028601 |
| RADICADO INTERNO | 574-23 |
| ASUNTO | Apelación de pruebas |
| DECISIÓN | Revoca |

La Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, JUAN DAVID GUERRA TRESPALCIOS y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, procede a pronunciarse al tenor de lo dispuesto en el numeral 2° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022, del recurso de apelación.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

JEISON ARLEY ARANZAZU GIRALDO formuló demanda ordinaria laboral de doble instancia contra TALLERES AUTORIZADOS S.A. Y DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.; pretendió: **i)** se condene a las demandadas de forma solidaria al pago de comisiones dejadas de percibir entre los años 2020 y 2021; **ii)** la reliquidación de todas las prestaciones sociales como consecuencia de incluir las comisiones como factor salarial; **iii)** la indemnización por despido injusto **iv)** sanción moratoria del artículo 65 del CST; **v)** la indemnización integral de perjuicios como consecuencia de la culpa patronal; **vi)**

¹ 01PrimeraInstancia; 02EscritoDemanda. Pág. 1/13

intereses moratorios; **vii)** indexación, **viii)** lo ultra y extrapetita; y **ix)** costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus pretensiones en que suscribió contrato de trabajo a término fijo con Talleres Autorizados S.A. para el cargo de técnico mecánico a partir del 01 de marzo del 2012 y hasta el 01 de abril de 2021 fecha en la que renunció motivado por el incumplimiento de las obligaciones laborales por parte del empleador, el estrés y la presión laboral, los favores personales a familiares y amigos del empleador y el incumplimiento en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la disminución de su salario. Talleres Autorizados S.A., presta sus servicios a Distribuidora Nissan S.A., razón por la cual considera son solidarias en las obligaciones laborales. Su jornada laboral era de lunes a sábado de 7:30 am a 5:30 pm; devengó un salario de \$2.861.674; viendo disminuidos sus ingresos en la medida de que el empleador comenzó a regalar a sus clientes los alineamientos por los que anteriormente cobraba comisión.

Indica que el 26 de febrero de 2010, le fue practicado examen médico de reingreso ocupacional en el que aduce se descartó evidencia de atrofias, limitaciones de movimiento, patología del manguito rotador o síndrome del túnel del carpo, sosteniendo que durante la relación laboral adquirió las patologías de epicondilitis media, epicondilitis lateral y síndrome del túnel del carpiano (sic), los cuales tienen nexos causales con los factores de riesgo de la actividad laboral que desempeñaba, aduce que las patologías se generaron por culpa de su empleador encontrándose en proceso de calificación por parte de la ARL Sura.

Oposición a las pretensiones de la demanda

Talleres Autorizados S.A.² Se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerarlas infundadas, sostiene haber cumplido con las obligaciones del contrato, implementando los procedimientos para prevenir los riesgos de los trabajadores de acuerdo a la matriz de peligros, además de desconocer la historia clínica del trabajador, considerando que no existe prueba de limitación física imputable a la empleadora además de que no se cumplen los requisitos del artículo 216 del CST para la procedencia de la indemnización plena de perjuicios; sostiene la inexistencia de solidaridad con Distribuidora Nissan y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Propone como

² 01PrimeraInstancia, 11ContestacionDemandaTalleresAutorizados

excepciones: inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, prescripción, buena fe e inexistencia de la culpa patronal.

Talleres Autorizados S.A.³ Se opone a las pretensiones de la demanda al considerarlas infundadas, sostiene que no sostuvo relación laboral con el demandante y por tanto no le adeuda suma de dinero alguna. Propone como excepciones: inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, prescripción y falta de legitimación en la causa por pasiva.

Reforma a la demanda

La parte demandante reformó la demanda incluyendo entre los hechos el diagnóstico de Luxación de la articulación del hombro, e indicó que la ARL Sura no ha iniciado proceso de calificación de sus patologías conforme al Decreto 1072 de 2015, encontrándose actualmente adelantando las gestiones necesarias para que le EPS le practique las ayudas diagnósticas solicitadas por su ARL.

Las demandadas indicaron no constarle los hechos adicionados, ratificándose en las contestaciones anteriormente presentadas.

Decisión objeto de recurso

En audiencia de que trata el artículo 77 del CPLSS llevada a cabo el 19 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Envigado denegó la prueba relacionada como dictamen de pérdida de capacidad laboral u origen de la pérdida de capacidad laboral por no haberse allegado con la presentación de la demanda exigiéndolo así el artículo 227 del CGP.

Recurso de apelación

Inconforme con la decisión adoptada en primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de reposición en subsidio apelación en su contra, sostuvo para tal efecto que la prueba pericial es relevante para determinar tanto el origen como el grado de invalidez del demandante, y al no decretarse conllevaría a denegar las pretensiones de manera anticipada; sin que se pueda desconocer que el artículo 51 del CPLSS indica que son

³ 01PrimeraInstancia, 14ContestacionDinissan

admisibles todos los medios de prueba y la prueba pericial será necesaria cuando el juez así lo estime.

La A quo se sostuvo en su decisión, y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo, continuando con la práctica de pruebas y supeditando la continuidad de la audiencia del artículo 80 del CPLSS a la decisión de segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del literal B del art.15 del CPTSS y el numeral 4 del art. 65 del referido código.

El numeral 4, de la referida norma consagra que es apelable el auto *“que niegue el decreto o la práctica de una prueba”*, encuentra la Sala que la A quo negó las pruebas al considerarlas inconducentes para el objeto del proceso.

Al respecto, el artículo 168 del CGP dispuso:

*“Rechazo de plano: El juez rechazará, mediante providencia motivada, **las pruebas** ilícitas, las **notoriamente impertinentes**, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.”*

Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional⁴, ha señalado que compete al juez analizar la pertinencia y conducencia de las pruebas, que lo conduzcan a formar su convencimiento y le permitan sustentar la decisión del litigio, y desde la sentencia T-393 de 1994, indicó:

*En consecuencia, **la negativa a ordenar la práctica de determinadas pruebas “sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas (...).”***

De este modo, corresponde al Juez hacer la verificación de las solicitudes probatorias, oportunamente realizadas y determinar en cada caso su pertinencia y conducencia para

⁴ Sentencia T-452 de 1998

acceder a su decreto o rechazar de plano aquellas que tal y como lo indica la norma, sean notoriamente improcedentes.

En el caso concreto la Juez procedió a fijar el litigio⁵ y en lo referente al tema de decisión fijó el litigio con el fin de determinar si existió culpa suficientemente comprobada respecto a la enfermedades padecidas por el trabajador, valorándose si hay lugar a la indemnización plena de perjuicios; fijación del litigio frente a la cual no se opuso ninguna de las partes, procediendo la juez de instancia con las etapas subsiguientes.

Consecuente con ello, debe resaltar la Sala que la prueba solicitada por la parte activa guarda relación directa con el objeto de litigio, pues corresponde a la juez de instancia determinar el origen y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que presenta el demandante en virtud de las patologías que se le han diagnosticado según la prueba documental aportada.

Ahora, si bien resulta cierto que el artículo 227 del CGP dispone que:

“DICTAMEN APORTADO POR UNA DE LAS PARTES. *La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días. En este evento el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba.”*

También resulta cierto que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral ha señalado en relación a la pérdida de capacidad laboral que:

“no es cierto que, como lo reivindica la censura, la calificación del estado de invalidez constituya una cuestión técnica ajena al conocimiento de los jueces, pues, por el contrario, es precisamente el juez del trabajo el que tiene el poder jurisdiccional para establecer el estado de invalidez y todas sus variables asociadas, esto es, entre otras, el origen de la enfermedad o accidente, la fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Para esos fines, a su vez, el juez cuenta con amplias potestades probatorias y de reconstrucción de la verdad real del proceso, de manera tal que puede darle credibilidad plena al dictamen o someterlo a un examen crítico integral o de

⁵ Minuto 08:34

alguno de sus elementos, hasta el punto de apartarse legítimamente de sus valoraciones y conclusiones.

Específicamente, en tratándose de la valoración de la pérdida de la capacidad laboral de los afiliados al sistema de seguridad social y de la fecha de estructuración de tal evento, la Corte ha sostenido que los dictámenes de las juntas de calificación, a pesar de su importancia, no representan conceptos definitivos e inmutables, sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria”⁶

Conforme a lo anterior, si bien la activa no allegó dictamen de pérdida de capacidad laboral de entidad del sistema de seguridad social o particular; si solicitó el decreto por parte del despacho de un dictamen que permitiera esclarecer el origen y pérdida de capacidad laboral generado por las patologías diagnosticadas por sus médicos tratantes, de donde se desprende que la prueba no solo resulta conducente y pertinente para esclarecer los hechos materia de litigio, sino que es útil al proceso en la medida en que puede favorecer a cualquiera de las partes, al permitir encontrar la verdad real; imponiendo al juez un ejercicio activo de sus poderes⁷.

En tal sentido, la Sala no encuentra ajustada la decisión objeto del recurso, pues al margen de que éstas formen el convencimiento del juzgador en relación con los argumentos de las partes, la prueba solicitada constituye un elemento técnico que apoyará la valoración de las pruebas ya aportadas y decretadas al momento de tomar la decisión que en derecho corresponda.

Por lo anterior, se **revocará** el auto del 19 de octubre de 2023, en cuanto denegó el decreto de la prueba pericial solicitada en la demanda, para en su lugar ordenar que se decrete y practique la misma.

COSTAS

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso de apelación.

⁶ Sentencias SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, SL3090-2014, SL9184-2016, SL697-2019, SL3380-2019, y SL1171-2022 y SL3308-2022

⁷ **ARTÍCULO 48. EL JUEZ DIRECTOR DEL PROCESO.** El juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite.

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el 19 de octubre de 2023 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Envigado, únicamente en cuanto denegó el decreto de la prueba pericial solicitada en la demanda, para en su lugar ordenar que la decrete y practique.

SEGUNDO: Sin COSTAS.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Juzgado de procedencia para que continúe el trámite del proceso.

Se ordena notificar por estados.

Los Magistrados,


MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA


ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ


JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS

| |
|--|
| <p>Certifico que el auto anterior fue notificado por ESTADOS N° 045 fijados hoy 13 de marzo de 2024 a las 8:00AM</p> <p>_____</p> <p>El secretario</p> |
|--|